



Déficit hídrico

La provincia de Biobío enfrenta hoy una realidad que ya no puede ser leída como coyuntural ni atribuida únicamente a ciclos naturales. La baja acumulación de nieve en la cordillera, sumada al retroceso sostenido de glaciares, está configurando un escenario hídrico más estrecho, exigente y, sobre todo, estructural.

Según lo señalado por el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Biobío, Juan Vallejos, la reciente temporada estuvo marcada por una menor disponibilidad de agua producto de un deshielo insuficiente, lo que tensionó la gestión del recurso en meses críticos como diciembre y enero. A ello se suma la información técnica levantada en la propia cuenca, que da cuenta de una baja acumulación de nieve como factor determinante en la disminución de caudales. Esta condición obligó a adoptar medidas extraordinarias, como ajustes en la operación del embalse Ralco, evidenciando que incluso los sistemas regulados comienzan a resentir la presión.

La advertencia sobre el retroceso de glaciares y nieves cordilleranas instala un desafío de largo plazo que redefine las reglas del juego. Como se ha señalado desde la propia cuenca, estas transformaciones “impondrán condiciones nuevas” en la distribución del agua. En otras palabras, la disponibilidad futura será menor y la competencia por el recurso, mayor.

En este contexto, la provincia de Biobío —con su fuerte presencia agrícola, forestal, hidroeléctrica e industrial— se encuentra en una posición particu-

larmente sensible. Aquí, el agua no solo es un bien ambiental: es un soporte productivo, social y territorial. Su escasez no impacta de manera uniforme, sino que golpea con más fuerza a los sectores rurales y a las comunidades que dependen de sistemas de abastecimiento más frágiles.

Por ello, resulta pertinente que desde el Ministerio de Obras Públicas se mantenga el foco en los servicios sanitarios rurales, reconociendo que el acceso al agua potable sigue siendo una prioridad urgente. Sin embargo, la magnitud del desafío exige ir más allá de la cobertura o la mejora de infraestructura. Se requiere una mirada integral que combine gestión eficiente, inversión sostenida y, sobre todo, gobernanza del recurso.

Un aspecto destacable en este escenario es la capacidad de articulación que han mostrado los usuarios del río Biobío. La coordinación entre actores —públicos y privados— ha permitido generar acuerdos que amortiguan los efectos de la escasez. No obstante, esta buena práctica no puede quedar supeditada únicamente a la voluntad de las partes: debe consolidarse como política pública, con reglas claras y visión de futuro.

El déficit hídrico ya no es una amenaza lejana, sino que es una realidad instalada que demanda decisiones hoy, porque el agua dejó de ser un recurso abundante para convertirse en un factor crítico del desarrollo. Y en la provincia de Biobío, ignorar esa evidencia sería el error más costoso de todos.